



JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO CERETÉ

Cereté, Córdoba, veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Radicado No.	23-162-31-03-002-2021-00071-00
Demandante	BRUNILDA DEL CARMEN ARIZA MILANEZ Y OTROS
Demandado	SOTRACOR S.A. Y OTROS

Procede el Despacho a resolver la solicitud que la parte demandante allegó **el 23 de mayo de 2023**, en la que invocó la pérdida de competencia con fundamento en el artículo 121 del CGP

Para resolver es necesario plantearse el siguiente interrogante ***¿Conforme lo previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, se perdió la competencia para seguir conociendo del asunto?***

Pues bien, la norma procesal en cita dispone:

Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de

determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible, aparte tachado INEXEQUIBLE> Será nula ~~de pleno derecho~~ la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.

Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.

PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada.

Con fundamento en esa normativa, uno de los elementos esenciales del debido proceso, es la sujeción a las reglas y los procedimientos establecidos por el legislador, condición que deriva del carácter de orden público de las normas procesales. Por ello, son componentes necesarios de ese derecho ius fundamental el cumplimiento del plazo razonable, la garantía al acceso a la administración de justicia, igualdad y obtención de recta y cumplida justicia (**artículo 29 C.N.**).

En el caso, la H. Corte Constitucional con la sentencia C-443/19 declaró la inexecutable de la expresión "*de pleno derecho*" contenida en el inciso 6 del artículo 121 del Código General del Proceso, señalando:

En un escenario como este, la imposición de un plazo cerrado tras el cual ocurre forzosamente la pérdida de la competencia, así como la nulidad automática de las actuaciones procesales adelantadas por el juez, desconociendo que el vencimiento de este plazo es el resultado de estos factores procesales que no pueden ser controlados enteramente por los operadores de justicia, hace que la norma demandada carezca del efecto persuasivo con fundamento en el cual se diseñó la medida legislativa.

....

Ante la inminencia del vencimiento del plazo, el juez puede verse compelido a restringir todas las actuaciones que puedan implicar una tardanza en el proceso, así como a hacer un uso excesivo de los poderes correctivos, de ordenación y de instrucción que le confieren los artículos 43 y 44 del Código General del Proceso, en temas cruciales como el reconocimiento y la práctica de pruebas, la valoración de las excusas por la inasistencia a las audiencias, la determinación de la viabilidad de los recursos contra las providencias judiciales, entre otros.

Igualmente, desde un punto sustantivo, la amenaza de la nulidad de pleno derecho de las actuaciones surtidas con posterioridad al vencimiento de los plazos procesales podría promover y dar lugar a decisiones apresuradas, no precedidas de un proceso analítico reflexivo, pausado y ponderado, como lo exigen las decisiones judiciales.

Conforme con los criterios jurisprudenciales citados, la pérdida de la competencia ante el vencimiento de los plazos previstos en la norma arriba citada no es automática, dado que en cada asunto se deben examinar las vicisitudes que tuvieron ocurrencia al interior del proceso, y que incidieron con el vencimiento del término con que se contaba para desatar la instancia. Y se procede a ello, en los siguientes términos:

- 1.** La demanda se presentó el **8 de abril de 2021**, **inadmitiéndose el 11 de mayo de 2021**, y admitiéndose la misma **28 de julio de 2021**.
- 2.** La Constancia de citación para notificación personal de la orden de apremio se allegó el **4 de agosto de 2021**.
- 3.** El **10 de mayo de 2022**, se tuvo por contestada oportunamente la demanda a cargo de SOTRACOR S.A., ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A., INTERCARIBE S.A., JUAN CARLOS LARA SEÑA a través de su apoderada judicial. Y se admitió el llamamiento en garantía propuesto por la demandada SOTRACOR S.A. hacia ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
- 4.** El **31 de octubre de 2022**, se tuvo por contestado el llamamiento en garantía y se fijó fecha y hora para la audiencia del artículo 372 del CGP.
- 5.** El **5 de diciembre de 2022**, se instaló la audiencia y se suspendió estando practicándose el interrogatorio de partes al demandado "Habida cuenta de las particularidades que se han dado en esta diligencia y que no se ha garantizado la no contaminación de la prueba, esto es, el interrogatorio de parte del demandado JUAN CARLOS LARA SEÑA, el despacho toma la determinación de suspender la presente audiencia y fija fecha para su práctica de manera presencial en las instalaciones de este juzgado." Fijándose como fecha para continuar con la misma de manera presencial el día **16 de diciembre de 2022**.

6. Sin embargo, en fecha **14 de diciembre de 2022**, se reprogramó la audiencia debido a que para aquella fecha ya se había fijado otra audiencia, estableciéndose el día **9 de febrero de 2023**, para esos efectos.
7. El **9 de febrero de 2023**, se continuó con la audiencia del artículo 372 del CGP, la cual se celebró en su integridad, fijándose fecha para la audiencia del artículo 373 el día **16 de febrero de 2023**.
8. El **16 de febrero de 2023**, se inicia la celebración de la audiencia del artículo 373 del CGP, ordenándose su suspensión por faltar una prueba testimonial indispensable, fijándose como fecha para continuarla el día **22 de febrero de 2023**.
9. Luego, **en auto de 21 de febrero de 2023, se decreta prueba de oficio** por considerarse necesarias las pruebas solicitadas, ordenándose librar oficios a las autoridades correspondientes.

De tal manera que se está surtiendo el trámite de las pruebas de oficio decretadas. Razón por la cual tal petición fue planteada después de la presunta consumación de la aducida invalidez, la cual para el Despacho se encuentra saneada. Pues de acuerdo al trámite procesal como el auto admisorio se notificó el **8 de agosto de 2021**, para ese día y mes del **año 2022 se habría perdido competencia, pero como hubo actuaciones posteriores sin reparo de las partes, está saneada como se dijo la causal**. Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia sostuvo:

*(...) la extinción del marco temporal para el ejercicio de la función jurisdiccional **no conduce inexorablemente a la pérdida de competencia del funcionario cognoscente, ni a la nulidad de los actos proferidos con posterioridad**, pues en los casos en que haya saneamiento expreso o tácito se quebrantarán tales consecuencias, dentro del marco del artículo 136 del Código General del Proceso (...). Dicho de otra manera, queda fuera de dubitación que (...) para que se produzcan los efectos invalidantes después de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que actúe o de que se profiera el veredicto, pues en caso contrario se saneará el vicio y se dará prevalencia al principio de conservación de los actos procesales.*

(...) [Se] tiene por admitido que la 'posibilidad de saneamiento, expreso o tácito (...), apareja la desaparición del error de actividad, salvo los casos donde no cabe su disponibilidad por primar el interés público, pues si el agraviado no lo alega, se entiende que acepta sus consecuencias nocivas' (SC, 1º mar. 2012, rad. n° 2004-00191-01). De manera que, como el artículo 136 de la nueva codificación procesal estableció únicamente como insaneables las 'nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermittir íntegramente la respectiva instancia', quedó por fuera de esta categoría la causada

*por el vencimiento del plazo máximo para fallar (...). Explicado de otra forma, **en tanto el mandato 121 nada dispuso sobre el saneamiento de la pérdida de competencia temporal (...)** deberá acudir al marco general de las nulidades, compuesto por un listado taxativo de motivos que no la admiten, dentro de los cuales no se encuentra aquélla, siendo aplicable, entonces, el principio general de la convalidación» (CSJ. SC3377 de 2021, SC845-2022 y STC10011 de 2022).*

En ese sentido, se han adelantado actuaciones con aquiescencia de la parte posterior a la fecha **8 de agosto de 2022**, que tornan saneable la nulidad.

No debe perderse de vista que este Juzgado es Civil con conocimiento laboral, con competencia constitucional, el cual presenta una carga considerable de procesos, que tornan imposible el cumplimiento de los términos procesales a pesar de los esfuerzos sobrehumanos del equipo de trabajo. Razón por la cual, la gran mayoría de las audiencias en asuntos civiles y laborales son celebradas de manera concentrada esto es las audiencias de los artículos 77 y 80 del CPT y 372 y 373 del CGP de manera conjunta, en los casos que para el Despacho no ofrecen mayor desgaste físico e intelectual, a pesar de que muchas de ellas demandan más de 9 horas en su práctica. En este caso no se efectuó de esa manera, dada otra estrategia de impulso procesal, en el sentido de fijar varias audiencias del art. 372 del CGP o del artículo 77 del CPT en aras de instar a las partes a que puedan finiquitar sus diferencias en la etapa de conciliación, lo que permite fijar mayor número de audiencias, que, si solo se hacen concentrada, pues solo podría fijarse dos en promedio semanalmente.

Aunado a lo anterior, este juzgado ha sufrido cambios en su planta de personal, en los cargos de Citador por nombramiento de lista de elegibles efectuado en noviembre de 2021, el cual renunció en octubre de 2022, estando aún en proceso el nombramiento en lista de quien deba ocupar dicho cargo en propiedad. Sumado a que, uno de los sustanciadores presentó quebrantos en su salud que lo incapacitaron desde el 22 octubre de 2022 con interrupción de un día en cada prorroga hasta el 22 de diciembre de 2022. Aspectos que incidieron en la ejecución de la labor, por el tiempo de espera que demanda acoplarse a los cargos, a pesar de la voluntad de cada una de las personas designadas para cumplir la labor. Incapacidad que se ha presentado en dos ocasiones en lo ocurrido del año 2023, una con 8 días y otra con 20 días, que por pocos que resulten los días, inciden en el rendimiento del despacho.

Asimismo, se ha estado en un proceso de digitalización de expedientes, de archivo de procesos, de entrega de procesos al personal de DIGIJUDICIAL para su escaneo y protocolización, que demandaron tiempo considerable del personal del juzgado para

cumplir esa labor.

Véase que este juzgado en el primer trimestre de 2023 programó 34 audiencias, 18 de ellas de asuntos civiles, aumentándose en su número las de este segundo trimestre, que solo hasta el 31 de mayo se han programado 36 audiencias faltando aún el mes de junio, realizándose prácticamente que a diario las audiencias, teniendo la suscrita jueza que revisar los demás asuntos, incluso en horario nocturno, y días de descanso; para poder emitir las decisiones escritas.

Todas esas vicisitudes, se mencionan en esta providencia para demostrar que no existe desidia alguna del Despacho en el impulso del proceso, todo lo contrario, se han dado todos los esfuerzos necesarios para satisfacer la demanda de justicia, pero ello resulta infructuoso de cara a la carga laboral y al número de personal del Juzgado.

Por lo que, volviendo al trámite procesal, las pruebas requeridas son necesarias para la decisión de fondo, estando el Despacho a la fecha en un plazo razonable para resolver, reitero, atendiendo la carga de procesos.

Finalmente, como el peticionario remitió copia de su solicitud al Consejo Seccional de la Judicatura, por secretaría remítase copia de esta providencia para lo de su competencia.

Por lo expuesto, el juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de pérdida de competencia solicita por el abogado **WILLIAM CESAR JALAL RAMOS**, en su condición de apoderado judicial sustituto de la parte demandante.

SEGUNDO: Por secretaría, **REMÍTASE** copia de esta providencia al Consejo Seccional de la Judicatura, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MAGDA LUZ BENITEZ HERAZO
JUEZA